

LIBERTAD DE CÁTEDRA Y MANUALES EN LA FACULTAD DE DERECHO (1845-1868)

Sumario: 1. Introducción. — 2. La libertad de cátedra en los planes liberales. — 3. Los manuales, vehículo pedagógico, ideológico y económico. — 4. Manuales para derecho.

1. *Introducción*

El estudio de la legislación y vida de la universidad española de los siglos XVIII y XIX lo han abordado en profundidad Mariano y José Luis Peset¹ y, en algunas cuestiones apuntan temas interesantes a desarrollar. Este es el caso del objeto de esta comunicación: la libertad de cátedra y las listas de manuales durante el período de 1848 a 1868. Al respecto, señalan las pautas e ideas más generales. Sobre ellas quiero apoyarme para tratar de ahondar algo más, si cabe.

Los cambios que se introducen en la universidad liberal no se producen de una manera drástica, sino que son el resultado de unas hondas transformaciones que se han ido experimentando desde muchos años antes. Se han ido gestando tiempo atrás y durante la época que llamamos liberal, obviando el período de Fernando VII, se irán tanteando nuevas soluciones, con avances y retrocesos. Por eso, no podemos olvidar que las reformas que quieren introducir los liberales entroncan directamente con algunas ya previstas en la universidad ilustrada. Se manifestarán paulatinamente. Con diferencias marcadas, sobre todo en cuanto a las ideas —que la primera

¹ M. Peset y J. L. Peset, *La universidad española (siglos XVIII y XIX). Despotismo ilustrado y revolución liberal*, Madrid, 1974. En esta gran obra recogen el conjunto de sus investigaciones al respecto, hasta ese año. No obstante, no es una síntesis, abordan cuestiones antes no estudiadas y no recogen todas las investigaciones hasta entonces habían publicado. Señalo esta obra como representativa de este esfuerzo investigador acerca de la universidad liberal española, pues para incluir todos sus trabajos serían necesarias muchas páginas.

responde o quiere responder a los nuevos principios propugnados por la revolución mientras que la ilustrada, se halla anclada en el antiguo régimen—, en algunos aspectos las reformas liberales derivan de un proceso gradual que ensaya nuevos métodos para mejorar la enseñanza desde los planes ilustrados.

La aparición de los manuales o libros de texto para las universidades significó un cambio esencial en la manera de concebir la enseñanza². La comunicación entre profesores y alumnos, como vehículo de transmisión del saber, es lo que justifica y da vida a la universidad en su historia³, de ahí la importancia de los manuales en el estudio de esta institución. Durante la edad media y gran parte de la moderna, los estudios jurídicos se basaron directamente en los textos del *Corpus iuris civilis*⁴. Como apunta Pascual Marzal, las constituciones de los estudios generales fijaban, a veces, hasta los títulos y párrafos del *Corpus* que debían comentarse para después traer opiniones de autores y concordancias con la legislación real⁵.

En el siglo XVIII comienzan a tener eco las ideas propugnadas por el racionalismo. Estas no sólo van a incidir en el contenido de las ciencias sino —y es lo que nos interesa resaltar— en el método para plasmarlo, en la forma de ordenar los principios, y, por tanto, en la forma de exponerlo ante los discípulos. Surge así, la necesidad no sólo de modernizar las asignaturas en las universidades —ámbito al que nos ceñimos— sino también de imponer unos libros de texto claros y sencillos. Ya Mayans había previsto la necesidad de estudiar mediante libros metódicos, claros y reducidos, dejando el manejo directo de los textos. Le parece, el problema de libros la

² M. Peset, «L'introduction des manuels d'enseignement dans les universités espagnoles au XVIIIe siècle» *De l'alphabetisation aux circuits du livre en Espagne, XVIe-XIXe siècle*, Paris, 1987, 163-185.

³ M. y J. L. Peset Reig, «El plan de estudios de 22 de diciembre de 1786 y la enseñanza universitaria en Valencia», *Actas III Congreso Nacional de Historia de la Medicina*, 3 vols., Valencia, 1969, I, 295-303, p. 295.

⁴ H. Coing, *Handbuch der Quellen und literatur der Reueren europäischen Privatrechtsgeschichte, Mittelalter (1100-1500)*, Munich, 1973, I, pp. 188-195; A. Pérez Martín, «Büchergeschäfte in Bologneser Regesten aus den Jahren 1265-1350», *Ius Commune* VII (1978), 7-49.

⁵ P. Marzal, «Docencia y pugnas en leyes y cánones. (Valencia 1707-1741)», *Actas del IV Congreso internacional sobre universidades hispánicas*, celebrado en México del 19 al 22 de agosto de 1997.

cuestión más importante para toda clase de enseñanza ⁶ —idea que veremos también repetida en los liberales.

2. *La libertad de cátedra en los planes liberales*

Los nuevos planes de estudio de Carlos III recogen por primera vez la preocupación manifestada por muchos ilustrados de mejorar el método de estudios a través de obras elementales, claras y sencillas que facilitarían al profesor sus explicaciones ⁷. Pero, si urgían los manuales, la uniformidad requerida por los ilustrados exigía que todos los centros se atuvieran a los mismos programas y libros. Por tanto, para no perder el control ideológico, que tanto preocupaba a los absolutistas, los libros de texto se determinaban preceptivamente en el plan y, así continuará en los planes generales de 1807 y 1824 ⁸.

A la muerte de Fernando VII, los liberales tratan de llevar a cabo sus reformas en la universidad de una forma más radical ⁹ y tanto

⁶ M. Peset Reig, «Inéditos de Gregorio Mayans y Sísar (1699-1781) sobre el aprendizaje del derecho», *Anales del Seminario de Valencia*, 11 (1966), 47-110, p. 58. Respecto de los estudios de jurisprudencia civil difiere de sus planteamientos generales, véase, M. y J. L. Peset, *Gregorio Mayans y la reforma universitaria. Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las universidades de España*, Valencia, 1975.

⁷ M. y J. L. Peset, «Política y saberes en la universidad ilustrada», *Carlos III y la ilustración*, 3 vols., Madrid, 1990, III, 30-135.

⁸ M. Peset, «L'introduction des manuels...», p. 174.

⁹ Con anterioridad, el plan interino de 1820, que no llegó a entrar en vigor, hacía referencia a la necesidad de enseñar y estudiar por libros que redujeran las ciencias a los principios más elementales, deduciendo de ellos las consecuencias más importantes. Sin embargo, la elección que se hace de los mismos, no es muy atrevida. Su variación no es muy marcada respecto de los borbónicos anteriores. M. y J. L. Peset, «La enseñanza de la medicina en España durante el siglo XIX. El informe de 15 de septiembre de 1820 para la reforma de las universidades», *Medicina española*, LX (1968), 28-35, 98-105, pp. 34 y 104-105. En cambio, en el reglamento general de instrucción pública de 1821 no se señalan textos, M. Peset Reig, «La enseñanza del derecho y la legislación sobre universidades, durante el reinado de Fernando VII (1808-1833)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXXVIII (1968), 229-375, en especial, pp. 306-339.

en el plan del duque de Rivas de 1836¹⁰, como en el Arreglo provisional de estudios de Manuel José Quintana, del mismo año¹¹, se declara la libertad más absoluta a la hora de elegir el manual que cada profesor estimara más oportuno. El Arreglo lo recogía en el artículo 45:

Los catedráticos podrán elegir el libro o libros de texto que les pareciere más conveniente. También se les da opción para no adoptar libro alguno de texto, excepto en la facultades de jurisprudencia civil y canónica y teología, pudiendo hacer sus explicaciones por medio de cuadernos o simplemente orales...

Ahora bien, a pesar de la libertad de elegir las obras de texto, tampoco podemos pensar que éstas se escapaban del control del ejecutivo —aun cuando no estaba prevista la intervención de éste—, pues a continuación se prescribía la obligación de pasar al rector y claustro de la facultad respectiva, una breve noticia de libro o libros que se exigieren como texto. Aquéllos, a su vez debían pasarlo a la dirección general de estudios «para los usos convenientes»¹². ¿Se quería con ello, no perder totalmente el control? En cualquier caso, está claro que la libertad de cátedra, y con ella la de textos, se consagra en el Arreglo.

Sin embargo, la escasa producción literaria en este sentido, hizo que en 1841 se aconsejaran ya, mediante una lista, los textos posibles para cada una de las asignaturas de 1836¹³. A los autores más antiguos y conocidos se suman ahora, los primeros tratadistas de las distintas ramas jurídicas en España.

¹⁰ Real decreto (4 de agosto de 1837) que incluye el plan de instrucción pública, *Decretos de Isabel II*, Madrid, 1837, tomo XXI, pp. 317-318. El artículo 84 determinaba, «la lengua nacional es la única de que se hará uso en las explicaciones y libros de texto» y el artículo 85, «En los institutos superiores y facultades mayores no tendrán obligación los profesores de seguir texto alguno en sus explicaciones, ni podrán imponerla a sus discípulos».

¹¹ Real orden (29 de octubre de 1837) aprobando el arreglo provisional, *Decretos de Isabel II*, Madrid, 1837, tomo XXI, p. 503.

¹² Artículos 46 y 47 del Arreglo provisional de López Quintana.

¹³ La lista de 1841 se encuentra en M. Peset Reig, «Universidades y enseñanza del derecho durante las regencias de Isabel II (1833-1843)», *Anuario de Historia del Derecho Español*, XXXIX (1969), 481-544, p. 527-528, nota 79.

Con la llegada de los moderados al poder se buscó una solución intermedia que remediara o compatibilizara el control del gobierno con la libertad proclamada —no en vano también eran liberales—. Así se llegó, en el plan Pidal de 1845 al sistema de listas, esta vez obligatorias¹⁴. Antonio Gil de Zárate lo describía así:

...malos efectos habían tocado, tanto del rigor antiguo que no permitía más que un sólo texto, señalado en el plan de un modo invariable, como del sistema de libertad absoluta adoptado por el arreglo provisional de 1836. El nuevo plan huyendo de estos dos extremos, estableció que el Consejo de instrucción pública formase para cada asignatura una lista corta de obras selectas entre las cuales pudiese el catedrático elegir, la que mejor le pareciere debiéndose revisar esta lista cada tres años...¹⁵

La ley Moyano de 1857 mantuvo la designación de libros de texto y programas¹⁶, incidiendo el reglamento general de 1859 aún más en este punto. Diez artículos dedicaba a manuales y programas¹⁷. El sistema de listas será suprimido en 1868. La Gloriosa revolución había proclamado la libertad a ultranza y ésta se extendía también a la elección por el profesor del libro de texto. El decreto de 21 de octubre¹⁸ argumentaba que «los profesores deben ser

¹⁴ En la exposición de motivos se justificaba la adopción de esta medida: «Desde el arreglo provisional de 1836 prevaleció el sistema de dejar al profesor entera libertad para elegirlos —los textos—. Sin examinar ahora la bondad absoluta de este sistema, lo cierto es que su adopción ha sido prematura en España y, sus resultados nada favorables. Ejemplares se han visto verdaderamente escandalosos de catedráticos que, abusando de esta libertad, han señalado textos que por su antigüedad, su descrédito o su ninguna conexión con el objeto de la asignatura, más bien que de enseñanza servían a los jóvenes de errada y funesta guía». *Colección de las leyes, decretos...*, Madrid, 1846, tomo XXXV, el plan en las páginas 197-246, cita p. 207-208.

¹⁵ A. Gil de Zárate, *De la instrucción pública en España*, 3 vols., Madrid, 1855, I, p. 191.

¹⁶ Ley de instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1874, LXXIII, pp. 2256-305.

¹⁷ Reglamento general de instrucción pública, 20 de julio de 1859, *Colección legislativa*, LXXXI, 157-181, en concreto arts. 10-19.

¹⁸ Decreto (21 de octubre de 1869) fijando el día 1 de noviembre para la apertura del curso académico de 1868 a 1869 en las universidades y esta-

también libres en la elección de métodos y libros de texto, y en la formación de su programa, porque la enseñanza no es un trabajo automático, ni el maestro un eco de pensamientos ajenos. El catedrático, merecedor de serlo, tiene un sistema y métodos suyos, y cuando se le imponen otros, pierde su espontaneidad y sus lecciones son una mezcla extraña de ideas y formas heterogéneas sin unidad ni concierto». Y, así ordenaba, en los artículos 16 y 17, la libertad de los profesores para señalar los manuales, adoptar método o presentar programa.

Pero esta libertad de cátedra no duró demasiado. De nuevo, en 1875 se volvía al sistema de listas y eran derogados los artículos 16 y 17 anteriormente citados por el artículo 1.º del decreto de 26 de febrero¹⁹. En la exposición de motivos, el ministro de fomento, Manuel de Orovio, consideraba que su «propósito no era impedir que el profesor elija libremente el método de su explicación, compatible con la designación de varios textos y con el deber de presentar su programa; pero, los perjuicios que a la enseñanza ha causado la absoluta libertad, las quejas repetidas de los padres y de los mismos alumnos, el deber que tiene el gobierno de velar por la moral y las sanas doctrinas y el sentimiento de la responsabilidad que sobre él pesa, justifican y requieren su intervención en la enseñanza oficial...». La designación de los libros de texto era fundamental para acabar con el desconcierto y la anarquía así como con una marcada decadencia en los estudios, denunciada ya por su antecesor, Navarro y Rodrigo, un año antes²⁰.

blecimientos públicos de enseñanza y determinando la legislación que ha de regir en esta materia, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1868, tomo 100, pp. 416-424.

¹⁹ Real decreto (26 de febrero de 1875) derogando los artículos 16 y 17 del decreto de 21 de octubre de 1868 y disponiendo vuelvan a regir respecto de textos y programas las prescripciones de la ley de 9 de septiembre de 1857 y del reglamento general de 20 de julio de 1859, *Colección legislativa*, tomo 114, pp. 288-290.

²⁰ Decreto (de 29 de septiembre de 1874), regularizando los estudios de segunda enseñanza hechos en los establecimientos privados, *Colección legislativa*, tomo 113, pp 622-630. «...Se ha permitido a los alumnos estudiar las materias de cada facultad en la forma en que quisieran y en el tiempo que tuviera a bien; y la mayoría de ellos usaron de esta licencia de tal modo, que en dos o tres cursos siguieron todas las asignaturas que antes exigían no menor tiempo que el de seis o siete años», p. 624.

El texto garantiza la enseñanza conforme a los adelantos de la ciencia; es un guía indispensable al alumno para utilizar las explicaciones del profesor; su necesidad ha sido generalmente sentida y su adopción obligatoria reclamada como medio de corregir abusos perjudiciales a la enseñanza ...El programa de la asignatura tiene los mismos fines y no es menos importante que el texto, al cual sirve de ampliación; y lejos de limitar la libertad del método, puede decirse que la garantiza, dado que en él consigna el profesor las variaciones y las diferencias que deben introducirse en el libro que sirve de guía a los alumnos...²¹

La respuesta fue rápida. Más de veinte catedráticos de la universidad central a los que se sumaron algunos otros de provincias abandonaron su cátedra. Yvonne Turín señala el hecho y a la vez, cómo se sintieron los liberales progresistas que presentaron el decreto como el punto de partida de treinta años de «noche universitaria»²². Para ella, parece exagerado el desconuelo, pues «un decreto podía anular otro decreto». Parece desconocer que tal decreto fue elevado a rango de ley —y, por tanto, sólo podía ser derogado por las cortes— junto a otros expedidos por el ministerio de fomento desde 1873 hasta 1876²³. Las limitaciones a la libertad de cátedra volvía a la etapa de Moyano, pues su intención no sólo era fijar los textos —para lo que pretendía, en principio añadir a la lista de 9 de agosto de 1868 las obras que estimare oportunas—, sino que pretendía formular unos programas generales de estudios, con el objeto de trazar los límites entre las distintas partes de una facultad, procurando armonizarlas. En palabras del decreto, el programa sería «un breve sumario, una enumeración de principios que deja al profesor cuanta amplitud conviene para desenvolverlos»²⁴. No obstante, ésta no es la verdadera intención del programa, pues en una real orden

²¹ Real decreto de 26 de febrero de 1875, *Colección legislativa de España*, tomo 114, pp. 288-290, cita en pp. 288-289.

²² Y. Turín, *La educación y la escuela en España. De 1874 a 1902*, Madrid, 1967, p. 296.

²³ Ley (29 de diciembre de 1876) declarando leyes del reino los decretos de carácter legislativo expedidos por el ministerio de fomento, desde el 20 de setiembre de 1873 hasta la constitución de las actuales cortes, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1876, tomo 117, pp. 871-874, p. 873.

²⁴ Real decreto de 26 de febrero de 1875, *Colección legislativa de España*, tomo 114, p. 289.

en que el gobierno manifiesta a los rectores sus propósitos en cuanto a la instrucción pública, el programa venía a servir de corsé para las enseñanzas del profesor pues debía explicarlo todo y en ningún caso ampliarlo más allá de lo razonable. La misión del profesor era «enseñar a la juventud las verdades conocidas de la ciencia dentro de los límites marcados para cada asignatura»²⁵.

Fueron, sin embargo, deseos que se concretaron en las escuelas primarias, pero que, según sabemos no llegaron a plasmarse en los estudios superiores. A pesar de que el consejo de instrucción pública se afanara a la tarea de elaborar programas y listas de libros para las facultades, al comenzar el curso de 1875 se dispone que mientras se publican las listas, los profesores titulares podían elegir las que quisieran, siempre con la aprobación del rector. Caso de disenso, resolvía la dirección de instrucción pública. Esto debía ser así hasta que aparecieran las «nuevas listas, comprensivas de todas las obras que parezcan dignas de servir para la enseñanza oficial» pero «no podrán estar terminadas en algún tiempo»²⁶. Pero no nos consta que se llegara a publicar ninguna.

Finalmente, en 1881, el gobierno elevará a las cortes la petición de derogar el decreto de 1875 y reponer en sus puestos a los «profesores destituidos, suspensos y dimisionados»²⁷.

3. *Los manuales, vehículo pedagógico, ideológico y económico*

Vehículo pedagógico. Para los moderados, como antes para los ilustrados, son necesarios unos buenos libros de texto para alcanzar el grado de perfección en la enseñanza que desean. Se pretende que sean un apoyo o ayuda no sólo para el estudiante sino también para

²⁵ Real orden (de 26 de febrero de 1875), dando a conocer a los rectores de las universidades las miras y propósitos del gobierno sobre instrucción pública y a qué reglas deben ajustar su conducta en el desempeño de su cargo, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1875, tomo 114, p. 293.

²⁶ Real orden (30 de septiembre de 1875) disponiendo que mientras no se publiquen las listas adicionales de las obras de texto para la enseñanza oficial, rijan las que adopten los profesores titulares, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1876, tomo CXV, real orden de 30 de septiembre de 1875, p. 527.

²⁷ M. Martínez Alcubilla, *Diccionario...*, VI, pp. 419 y 420.

el profesor. De ahí, que cumplan dos funciones, exponer por una parte, a los alumnos, con método y claridad, las diversas materias, objeto de estudio y por otra, señalar a los catedráticos la extensión que pueden dar a sus clases y el orden más conveniente para una mejor y más clara exposición de las doctrinas²⁸.

La Real orden de 1.º de septiembre de 1846 que aprueba la primera lista de obras de textos obligatoria para las distintas facultades, describe cómo tienen que ser los manuales:

Las obras textuales deben contener la parte elemental de la materia que forma el objeto de la asignatura, con claridad, buen método y exactitud; reunir el complemento de nociones que alcance la ciencia en nuestros días; ser de una extensión proporcionada al número de lecciones que de la materia han de darse; presentar las diferentes partes de una ciencia dividida con arreglo a las diversas asignaturas en que han de estudiarse y comprender con la debida separación las materias de las dos o más que se explican en un mismo curso²⁹.

Los libros de texto sólo tienen sentido como vehículo de comunicación de los adelantos o progresos más útiles a los jóvenes. Sirven para propagar la ciencia, no para hacerla progresar, por eso, no deben destinarse a nuevas investigaciones, sino sólo manifestar las ya conocidas³⁰.

Instrumento ideológico. Los manuales tienen un sentido didáctico claro pero también se convirtieron en un instrumento ideológico³¹. Una aspiración liberal heredada de los ilustrados era uniformizar las universidades. Y así lo expone abiertamente Pidal en la exposición de motivos de su plan de estudios³². Para ello, conside-

²⁸ Colección legislativa de España, Madrid, 1850, tomo XLVII, «Real decreto, promoviendo la formación de libros de texto para uniformar la enseñanza», p. 620.

²⁹ Colección legislativa de España, Madrid, 1849, tomo XXXVIII, p. 250.

³⁰ Colección legislativa de España, tomo XLVII, p. 622.

³¹ Los manuales en Francia, sobre todo en los colegios, su función en el plano ideológico y también didáctico, ha sido estudiado recientemente por A. Choppin, *Le Pouvoir et les livres scolaires au XIX^e siècle*, Paris, 1989 y *Les manuels scolaires: histoire e actualité*, Paris, 1992.

³² Antigüamente, eran las universidades independientes entre sí, y hasta del gobierno mismo; cada cual tenía su régimen, sus estudios, sus métodos

rabán que no sólo las asignaturas debían ser las mismas sino también los libros y doctrinas que en ellas se enseñaran. Las listas cumplirán —entre otras— esta función.

Mediante las listas, el contenido de las explicaciones no escapa del control del gobierno —que era «el director de la enseñanza»—. Cualquier manual debe responder a un programa que le fija los límites y determina su objeto. El programa es «la esencia, por decirlo así del libro» por ello no puede «formarse arbitrariamente, sino con el auxilio de las personas más entendidas en la materia y bajo la intervención del real consejo de Instrucción pública»; como tampoco conviene que sean perpetuos, pues deben ser reemplazados por otros que recojan posteriores avances de la ciencia³³.

La libertad, a pesar de la limitación en la elección de textos, parecía salvada por la concurrencia o variedad de los mismos. El artículo 48 del plan Pidal preveía que cada asignatura se acompañara de hasta seis textos diferentes entre los cuales el profesor tenía la «libertad» de elegir³⁴. La misma exposición del plan conocía los recelos que plantearían tal medida y resolvía la cuestión:

Verdad es que cuando el gobierno prescribe los libros de enseñanza, entra el recelo de que tienda a comprimir las ideas o establecer un monopolio exclusivo en favor de autores determinados. El proyecto, huyendo de todos esos extremos, establece que el consejo de instrucción pública forme para cada asignatura una lista corta de obras selectas, entre las cuales pueda elegir el catedrático la que mejor le parezca, y que esta lista sea revisada por la misma corporación cada tres años³⁵.

y aún sus pretensiones distintas... Ya desde el siglo pasado trató de poner diques el gobierno a semejante anarquía...El nuevo arreglo está destinado a realizar esta especie de centralización...», Real decreto de 17 de septiembre de 1845, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1846, XXXV, p. 207.

³³ *Colección legislativa de España*, tomo XLVII, p. 622 y 623.

³⁴ «Los libros de texto se elegirán por los catedráticos de entre los comprendidos en la lista que al efecto publicará el gobierno y en la cual se designarán a lo más seis para cada asignatura. Esta lista se revisará cada tres años, oído el consejo de instrucción pública; en la facultad de teología se oirá también a los prelados que el gobierno designe...» *Colección de las leyes, decretos...*, Madrid, 1846, tomo XXXV, pp. 197-246; el artículo 48 en p. 229.

³⁵ Plan de estudios de 1845, *Colección de las leyes, decretos...*, Madrid, 1846, tomo XXXV, el plan en las páginas 197-246, cita p. 208.

Ya no se trata de aquellas obras impuestas o determinadas por los ilustrados o los absolutistas, pero tampoco se quiere dejar una total libertad para no perder el control ideológico que supone la designación de libros³⁶. Aunque se deja abierta una tímida puerta para salvaguardar la máxima de la revolución, siempre bajo el control del ejecutivo, cuando el mismo artículo 48 termina diciendo que «se exceptúan de esta regla los estudios superiores, en los que tendrá facultad el profesor de elegir los textos, o de no sujetarse a ninguno, siempre bajo la vigilancia del gobierno».

La modificación que de este plan hace Pastor Díaz³⁷ en 1847, en nada afectará a la redacción de este artículo, que continúa con el mismo texto, sin embargo, las variaciones sí son importantes en el reglamento que lo desarrolla. En él aparece como obligación de los alumnos «el comprar el libro de texto que señale el catedrático para las explicaciones, escribiendo en la portada su nombre y apellidos y el número que tenga en la lista»; en cualquier momento el profesor podía exigir la presentación del mismo. Si el concursante dejara de cumplir esta obligación —según el reglamento— no sería admitido a examen³⁸. Esta disposición será endurecida aún más por Seijas, dos años después. El profesor debía exigir a todos los alumnos de su clase la presentación de sus libros de texto, concediendo al que no los tuviere el plazo de 8 días para adquirirlos, pasados los cuales, «se le borrará de la matrícula» caso de no tenerlos. Además, prohibía que el libro que hubiere servido a un cursante se traspase a otro aunque fuera hermano o pariente³⁹. La situación recuerda un tanto, a la que se vivió en la época de Fernando VII, cuando la escasez de libros de texto impulsa a la recién creada inspección general de instrucción pública —año 1825— a realizar y fomentar ediciones de los libros marcados para cada asignatura, obligando a los alumnos, antes de matricularse, a presentar cada uno su propio libro⁴⁰.

³⁶ M. Peset, «L'introduction des manuels...», p. 174.

³⁷ Real decreto de 8 de julio de 1849, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1849, XL, p. 305, art. 30.

³⁸ Reglamento para la ejecución del plan de estudios decretado por S. M. en 8 de julio de 1847, Real decreto de 19 de agosto de 1847, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1849, XL, p. 601, art. 225.

³⁹ Real orden de 24 de septiembre de 1849, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1850, XLVIII, pp. 89-90.

⁴⁰ M. Peset Reig, «la enseñanza del derecho...», pp. 361-362.

En el plan Moyano de 1857 la libertad de cátedra sufre aún mayores limitaciones pues ya no se recoge la coletilla de que en enseñanzas superiores el profesor, bajo el control del gobierno, pueda elegir libremente el texto y además hace alusión de un modo explícito a los programas de las asignaturas :

Art. 84 :»El gobierno publicará programas generales para todas las asignaturas correspondientes a las diversas enseñanzas, debiendo los profesores sujetarse a ellos en sus explicaciones; se exceptúan en las facultades los estudios posteriores a la licenciatura»,

Art. 86 «Todas las asignaturas de la primera y segunda enseñanza, las de las carreras profesionales y superiores y las de las facultades hasta el grado de licenciado, se estudiarán por libros de texto; estos libros serán señalados en listas que el gobierno publicará cada tres años»⁴¹.

El reglamento de 1859 concretaba estos artículos de la ley. El consejo de instrucción pública era el encargado de formar y remitir las listas de los libros de texto al gobierno cada tres años; comenzando el primer trienio en el año académico de 1861 a 1862. Para el examen y la formación de estas listas el presidente del consejo distribuiría los consejeros en cuatro comisiones —pudiendo ser nombrado cada uno de dos o más—: ciencias eclesiásticas, morales y políticas, literatura y bellas artes, ciencias exactas, físicas y naturales y ciencias médicas. Se examinarían las obras que a su juicio, lo merecieran así como las presentadas por sus autores o editores. Estos últimos debían presentar sus instancias acompañadas de dos ejemplares impresos, antes del 1.º de febrero del año en que comenzara el trienio académico en que debían regir las listas. Se consideraban a este efecto como obras nuevas —hasta tal punto era el control ideológico—, las ediciones en que se hiciera alguna variación del texto. Para el examen de las propuestas por los consejeros, la adquisición de los dos ejemplares corría a cargo de los fondos públicos. Caso de que ninguna obra reuniera los requisitos necesarios para ser adoptada como libro de texto, el consejo podría proponer al gobierno convocar un concurso, redactando el programa a que debían ajustarse los trabajos de los can-

⁴¹ Ley de instrucción pública de 9 de septiembre de 1857, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1874, LXXIII, pp. 272-273.

didatos, indicando el premio o bien, que se tradujera alguna obra extranjera.

Respecto de los programas generales, en cumplimiento del artículo 84, que debían publicarse para cada asignatura, se encargaba su redacción a estas mismas comisiones, que debían tener presente, para las facultades y escuelas superiores, los formados por los profesores. Se revisarían cada seis años, y, el primero para el curso académico de 1860-61, pero hasta el curso siguiente no tendrían obligación los profesores de atenerse a ellos, por ello, estaba previsto que se publicaran un año antes de que empezaran a regir⁴². No obstante, todo lo expuesto, en cuanto a los programas quedó tan sólo expresado en el texto legal, pues no he encontrado ninguno de ellos. Tan sólo respecto de alguna asignatura, la petición por parte del consejo de instrucción pública de la remisión a los claustros de facultad de los programas de estos profesores⁴³. Otras veces, se habla del programa general de cada facultad, pero no hace referencia al contenido de los estudios sino a la distribución de las asignaturas⁴⁴.

¿Qué se quiere controlar? Por una parte, que los libros y por tanto las enseñanzas no atenten ni contra la religión, ni contra el rey, ni contra la monarquía constitucional instaurada. Por otra parte, estamos en unos momentos de cambios importantes y desde las escuelas de primera enseñanza, pasando por los institutos y facultades, se quiere instruir a la gente desde esos principios revolucionarios, pero moderados. Ni se podía volver atrás ni se podía ir demasiado lejos. Los manuales son vehículo de difusión de las ideas de gobierno, a la par que un freno en la introducción de nuevas teorías o investigaciones.

Instrumento económico. El control ideológico por parte del gobierno no sólo lo establece a través de los programas y determinando los libros que pueden considerarse objeto de estudio por el profesor, sino también cuando vela por el cumplimiento de la

⁴² Reglamento general de instrucción pública, 20 de julio de 1859, *Colección legislativa*, LXXXI, 157-181, en concreto arts. 10-19.

⁴³ Real orden modificando el programa general de la facultad de derecho de 23 de septiembre de 1864. Circular, dictando varias prescripciones sobre el modo de llevar a efecto lo dispuesto en el art. 84 de la ley de 9 de septiembre de 1857..., de 14 de enero de 1860, *Colección legislativa de España*, Madrid, 1860, LXXXIII, p. 36-37. Se refiere a segunda enseñanza.

⁴⁴ *Colección legislativa de España*, Madrid, 1864, XCII, p. 488.

norma, a este respecto, por parte de los estudiante. Ya hemos visto, cómo el reglamento de 1847 les obligaba a comprar los manuales. La disposición, a pesar de lo tajante, no parece que tuviera demasiado efecto pues, Seijas en 1849, vuelve a ordenarla. Ese mismo año, se enviaría a todos los rectores de las universidades una real orden «resolviendo que se excite el celo de los rectores de las universidades para que se pongan especial cuidado en el cumplimiento de lo prevenido en orden a la adquisición por los alumnos de los libros declarados textuales»⁴⁵. El motivo de tal orden había sido que varios editores de obras declaradas de texto para las universidades habían recurrido a la reina, debido a los perjuicios que se les originaban cuando los alumnos descuidaban la obligación de comprar el libro que el catedrático designaba para sus explicaciones.

En una de las exposiciones, presentada por D. José Iturregui, representante de la sociedad de abogados de esta corte, que está dando a luz la Biblioteca de Jurisprudencia y Legislación, se añade que, a pesar de tener conocimiento de que algunos catedráticos han adoptado para texto las obras tituladas Mackeldey, *Elementos del derecho romano*, Sempere, *Historia del derecho español*; Marina, *Ensayo histórico crítico sobre la legislación*, y las *Explicaciones históricas de las Instituciones de Justiniano*, por Ortolán, publicadas por dicha sociedad y adoptadas para texto por el real consejo de instrucción pública, la venta de ellas no ha correspondido al número de alumnos matriculados en las escuelas, de donde se deduce que no se ha cumplido con lo que está mandado⁴⁶.

Son varias las órdenes que se envían a los rectores para que velen por el cumplimiento de esta disposición. Sorprende sin embargo, que se les prohíba, en algún momento, que coaccionen a los alumnos para comprar libros, cuando éstos estaban amenazados de expulsión caso de no hacerlo.

¿Se puede decir que era un negocio? Efectivamente, lo era para los autores y editores cuyos libros figuraban en las listas pues la venta la tenían asegurada. Pero el gobierno trató de que no se aprovecharan de esta situación. De hecho, se cometieron algunos abu-

⁴⁵ Colección legislativa de España, Madrid, 1849, tomo XLVI, pp. 366-367.

⁴⁶ Real orden de 24 de abril de 1849, Colección legislativa de España, Madrid, 1849, tomo XLVI, pp. 366-367.

sos en cuanto a las obras señaladas para la instrucción primaria, cuyos autores subieron el precio exorbitantemente, por lo que en 1850 se ordena que la publicación de estas listas se acompañará del precio fijado, después de haberse puesto de acuerdo, el consejo de instrucción pública y el autor o editor⁴⁷.

Por otra parte, y en cuanto a los profesores de facultad qué duda cabe que si no un negocio, si era una forma de ser conocido, afamado y sus ideas o investigaciones reconocidas. Sorprende, cómo en las listas de derecho, por ejemplo, se repiten a veces, los mismos autores en distintas asignaturas.

4. *Manuales para derecho*

En 1829 se traduce en España el *Manual del legista* del francés Dupin en el que advertía que «el catedrático para facilitar a los discípulos el modo de referir las consecuencias a los principios», debía indicarles una obra elemental en que estos principios estuviesen expuestos con claridad, enlazados con método y enunciados con precisión. A lo que apostillaba Gregorio Morales que «por desgracia en España no se verá muy embarazado el catedrático en la elección de este libro elemental. Fuera de que no puede separarse de lo que prescribe el plan vigente de estudios; lloramos además que en vista de la suma falta que hace una obra de esta clase, que comprenda con el posible método y claridad los elementos de nuestra jurisprudencia, no haya entre tantos jurisconsultos de crédito uno que se dedique a hacer al público este gran servicio»⁴⁸. Esta denuncia la veremos repetida a lo largo de todo el siglo XIX —sobre todo la primera mitad.

De hecho, las obras que aparecen en la primera lista de 1846 no son textos inspirados en la reforma⁴⁹. La variedad prescrita en el

⁴⁷ Real orden de 15 de enero de 1850, , *Colección legislativa de España*, Madrid, 1850, XLIX, pp. 50-52.

⁴⁸ Dupin, *Manual del legista o colección de diversos opúsculos de jurisprudencia*. La traducción al castellano con varias adiciones y correcciones, acomodada a nuestras leyes, por Gregorio Morales Pantoja, Madrid, 1829, pp. 81-82.

⁴⁹ M. Peset Reig, «El plan Pidal de 1845 y la enseñanza en las facultades de derecho», *Anuario de Historia del Derecho Español*, XL (1970), 613-651, p. 641.

plan de obras de texto no se vería cumplida. Las listas impuestas desde 1846 nos indican la escasez de la producción española, sobre todo si pensamos que entonces se escribía casi exclusivamente con destino a la universidad⁵⁰. De hecho deberán aprovechar muchos de los libros reseñados en 1842 para confeccionar la lista. Los liberales eran conscientes de esta carencia y en numerosas ocasiones lo denuncian. Los primeros manuales de derecho de la época suelen hacer referencia a este problema en sus primeras páginas. Así por ejemplo, Hernández de la Rúa advertía de «la falta de unas instituciones de jurisprudencia española que, economizando tiempo impusieran a la juventud en los principios fundamentales de nuestro derecho, desnudo de aquel fárrago impertinente y superfluo de doctrinas traídas de los códigos legales del imperio romano»⁵¹. Con un sentido renovador, Gómez de la Serna y Montalbán, estaban «convencidos de que las obras elementales sólo deben comprender principios claros, demostrarlos con solidez, encadenar las ideas de modo que formen un todo uniforme, abrazar lo necesario y no descender a cuestiones poco útiles comunmente y casi siempre sin aplicación, nos separamos del camino trazado por la mayor parte de nuestros autores...»⁵².

Esta «escasez de buenas obras elementales y hasta la absoluta carencia de ellas en muchos ramos» será reconocida en la real orden de 1845⁵³, cuando deja a elección de los claustros los libros que hayan de servir de texto en las diferentes asignaturas, pues el consejo de instrucción pública no pudo confeccionarla para ese año. De hecho, la primera lista, en 1846, aparece titulada «provisional». Y no es por casualidad:

La escasez de obras que reunan todas o la mayor parte de la circunstancias apetecidas y que sean dignas por tanto de figurar en aquella lista; la precisión de echar mano para formarla ahora de muchos libros poco a propósito y que incluidos en ella ocuparían

⁵⁰ M. Peset, «El plan Pidal...», p. 641.

⁵¹ V. Hernández de la Rúa, *Lecciones de derecho español*, Madrid, 1838, pp. I-II.

⁵² P. Gómez de la Serna y J. M. Montalbán, *Elementos del derecho civil y penal de España*, 3 vols., Madrid, 1840, pp. 5 y 6.

⁵³ Real orden de 30 de octubre de 1845, *Colección de las leyes, decretos...*, Madrid, 1846, tomo XXXV, pp. 481-482.

por tres años un lugar del que obras más útiles con posterioridad se verían privadas; y, por último la consideración de lo preferible que es, elaborar lentamente este trabajo por medio de listas provisionales que permitan introducir sucesivamente en ellas cada año los libros que aparezcan con las condiciones requeridas, bastan a probar, a juicio del consejo, que lo que propone no debe recibir el carácter de definitivo⁵⁴.

En algunas listas, las asignaturas no vienen acompañadas de manuales «mientras no haya obras de texto acomodadas a esta asignatura». La solución parece estar en convocar premios. Con los concursos se quiere promover las publicaciones y las listas aparecen como estímulo de autores y editores, ya que uno de los premios era figurar en ellas. El método de las listas al paso que ponía coto a los inconvenientes de la libertad absoluta, dejaba —según el plan— «suficiente campo a las personas doctas para dedicarse a la composición de libros útiles y, acaso las favorece porque el fallo de una corporación imparcial e ilustrada se inclinará siempre al verdadero mérito, mientras el interés propio, la desidia o los compromisos suelen ser causa de que los meros profesores se decidan por obras de valor escaso»⁵⁵.

No obstante y a pesar de los esfuerzos, los frutos no se pueden recoger tan rápidamente como esperaban. En 1849, un real decreto que promovía la formación de libros de texto, con el fin de uniformar la enseñanza, se refiere a las obras contenidas en las listas y no las deja demasiado bien:

Obras escritas años ha, sin haber entre ellas unidad de doctrina ni de método, opuestas las más a la índole de los estudios actuales y tal vez en contradicción con los programas publicados por el gobierno; extractos, epítomes y compilaciones hechas sin discernimiento por manos imperitas en la materia; traducciones por fin, que en el fondo adolecen de iguales defectos y funestos de corrupción y mal gusto; tales son los libros que, por lo general y con algunas excepciones, figuran en nuestras listas de textos, aun después de haber elegido los menos defectuosos de entre ellos⁵⁶.

⁵⁴ *Colección legislativa de España*, Madrid, 1849, tomo XXXVIII, p. 249.

⁵⁵ Plan de estudios de 1845, *Colección de las leyes, decretos...*, Madrid, 1846, tomo XXXV, el plan en las páginas 197-246, cita p. 208.

⁵⁶ *Colección legislativa de España*, tomo XLVII, p. 621.

Pero para los estudios de derecho, no sólo se expone la necesidad de unos libros de textos claros sino que ya los ilustrados enlazan esta necesidad a la reforma urgente de la legislación y sobre todo a la redacción de un código⁵⁷. El conde de Cabarrús recogía que «un código no sólo significaba una seguridad jurídica, sino que facilitaría el estudio del derecho, disperso en tantas leyes contradictorias, arcaicas y confusas». Después de criticar «aquella mole de treinta y seis mil leyes, con sus formidables comentadores» considera que «el despotismo sin leyes causaría un daño menor». La solución que apuntaba pasaba por la formación de un código civil y criminal, pues mientras no se tuviera, «enseñar jurisconsultos es adiestrar asesinos y poner al hombre de bien en la dura precisión de serlo. Pero suponiendo la formación preliminar de un código bien hecho, la enseñanza de éste, será objeto del colegio de jurisprudencia⁵⁸. Del mismo parecer eran José del Campillo⁵⁹, Joaquín M.^a Palacios y Hurtado⁶⁰, entre otros.

Así pues, y como ya se había reivindicado, los manuales en derecho van proliferando a medida que aparecen los códigos liberales, copiando la mayoría de las veces su propio esquema, hasta tal punto, que se recomienda, a veces, entre las obras de texto, los comentarios hechos al código por personas que han intervenido en su redacción y que nada saben de métodos docentes. Cuando éste se retrasa, como es el caso del código civil, se tiene presente el *Code* para facilitar la confección del manual.

⁵⁷ Ya M. Peset hacía ver el valor pedagógico de los códigos.

⁵⁸ F. Cabarrús, *Cartas sobre los obstáculos que la naturaleza, la opinión y las leyes oponen a la felicidad pública*, Madrid, 1933, pp. 96 y 97.

⁵⁹ «Se cree que con estas reglas y las de formalizar un código, apartando el fárrago de tanta multitud de autores que más sirven para confundir que para enseñar, se criarían perfectos jurisconsultos que supiesen no oponerse al derecho, sino ser del derecho verdaderos auxiliares», *Lo que hay de más y de menos en España para que sea lo que debe ser y no lo que es*, ed. Estudio preliminar de A. Elorza, Madrid, 1969, p. 164.

⁶⁰ «Acaso en esta época tendremos la dicha de ver el arreglo y formación de un código, cuyo sistema y claridad y método, haga inútiles las leyes romanas y las destierre para siempre de las escuelas... Si esto sucediese, en menos años de estudios y con menos fatiga se harían más progresos y más seguros en la ciencia legal», *Introducción al estudio del derecho patrio*, Madrid, 1803, cita en nota p. 13.

Las listas nos introducen en los estudios universitarios ¿Qué textos se manejaban? ¿Cómo se introducen o reflejan los cambios? ¿Quién publica?...

La revolución impone una serie de reformas rápidas para romper con el antiguo régimen, que lógicamente, se reflejan en el derecho, y por tanto, en los manuales. Pero, si, a nivel político, y tras la muerte de Fernando VII, la constitución, sea de uno u otro signo, las recoge con fuerza; en derecho civil, los cambios son lentos, dubitativos y con graves dificultades para avanzar en un tema tan importante para los liberales como la propiedad; después se complicará con los derechos de los territorios forales. Estos cambios, más o menos lentos, se manifiestan en los manuales, escritos, en derecho, a veces más por políticos que por personas dedicadas a la docencia⁶¹.

En materia civil, las primeras obras que surgen con el plan tratan de suplir la carencia de un código. Manifiestan la necesidad de resumir y clarificar con definiciones más precisas, obviando las leyes derogadas, los principios fundamentales de la nueva época. Llama la atención la persistencia del Sala⁶², un texto que resulta difícil de aprender, con verbo poco ágil para los estudiantes y del que se harán numerosas ediciones. En la reforma interina de 1820, ya se señala un texto para cada asignatura y, para el civil, se designa a Sala. Pero, la comisión de instrucción pública es consciente de sus limitaciones: «bien conoce la comisión los defectos e insuficiencias de estas dos obras⁶³ para un objeto tan importante y esencial como es el estudio del derecho patrio; pero, no hay otras mejores, y éste es un vacío que siempre habrá en nuestros estudios, hasta que la legislación española reciba de la representación nacional, la sencillez, dignidad y filosofía que le faltan»⁶⁴.

Esta es la opinión que la obra merece en 1820 y sin embargo, estará presente en los años...pues otros textos que le suceden no ten-

⁶¹ M. Y J. L. Peset, *La universidad española...*, pp. 701-702.

⁶² *Ilustración del derecho real de España*, 2 vols., se publica por primera vez en Valencia en 1803, después aparecen numerosas ediciones, véase, M. Peset, «Derecho y propiedad en la España liberal» *Quaderni Fiorentini* (1976-177) 5-6, 463-507.

⁶³ Se refiere a la *Ilustración...* de Sala y a la *Historia...* de Sotelo.

⁶⁴ «El informe de 15 de septiembre de 1820 para la reforma de la universidad» publicado en M. Peset y J. L. Peset, «La enseñanza de la medicina...», p. 102.

drán la altura, a pesar de sus defectos —recuérdese que la primera edición es de 1803— de *La ilustración...* de Juan Sala. Nos referimos a las obras de Alvarez⁶⁵ y Hernández de la Rúa⁶⁶. Sólo uno destacará por su novedad, concisión y sistemática, los *Elementos de derecho civil...* de P. Gómez de la Serna y J. Manuel Montalbán.

Si todos tienen en común el tratar de reorganizar el derecho vigente desde un método más racional y preciso, es el de Gómez de la Serna y Montalbán el que aporta, a los mismos materiales, unos aires más modernos. La influencia del *Code* es ya clarísima no sólo en la sistemática sino también en las definiciones. Después, la llegada de Del Viso⁶⁷ y Benito Gutiérrez⁶⁸ —más un tratado que un verdadero manual— enriquecen la literatura jurídica en materia civil.

Por regla general, podemos decir que en civil, si bien se mejoran las publicaciones destinadas a la enseñanza en las facultades, pues aportan aires renovadores en su metodología. En cuanto al sistema no se alejan mucho del romano, no se quiere romper con la tradición quizá porque todavía están vigentes los viejos textos de *Partidas*, para los que guardan un gran respeto y se deshacen muchas veces en increíbles elogios. Quieren clarificar las nociones, precisar las definiciones, simplificar las clasificaciones, acercarse a la nueva época, pero respetando lo anterior porque, en ocasiones, todavía está vigente. Aparece recogida la nueva propiedad, la accesión se tiene ya como inherente a la misma y no como derecho derivado, sin embargo, y como consecuencia de ese conservadurismo ya aludido se protegen instituciones que ya no caben en esta época, tal como la enfiteusis.

En historia del derecho, las pocas obras que aparecen adolecen de un gran medievalismo. Parece que los acontecimientos tan importantes ocurridos no merezcan la pena mencionarlos, o que temen

⁶⁵ *Instituciones del Derecho real de Castilla e Indias*, Guatemala, 1829. La segunda, en Habana 1841.

⁶⁶ *Lecciones de Derecho español*, 2 vols., Madrid, 1838.

⁶⁷ *Lecciones elementales del historia y de Derecho civil, mercantil y penal de España*, La primera parte, la historia, publicada en Valencia en 1852, la segunda edición en 1865; la segunda parte, el derecho civil, en Valencia, 1859-60, la segunda en 1863, la tercera en 1872, y la cuarta en 1879-80.

⁶⁸ *Códigos o estudios fundamentales sobre el Derecho civil español*, Madrid, 1869. La segunda edición es de 1871 y la tercera de 1877.

aproximarse a épocas tan cercanas. O quizá que no es propio de la historia, pues cuando se habla de la revolución y los efectos en la legislación suelen estas obras aconsejarse para la ampliación. Por regla general, todos los manuales jurídicos, van a dar justificación al nuevo régimen, pero sin duda alguna, es en los dedicados a la historia, donde la manipulación de los hechos o la inclusión de argumentos basados en las nuevas ideas y retrotrayéndolos a épocas pasadas, donde no cabe referirlos, va a ser más clara. Por ejemplo, sorprende cuando Sempere hace una apología de la propiedad privada criticando la forma de explotación comunal de la tierra en las tribus prerromanas⁶⁹. O cuando Antequera, al tratar el reinado de Felipe V, no sólo no entra en el análisis o comentario de los decretos de nueva planta, sino que ni tan siquiera los menciona y, sin embargo, se entretiene en «un hecho muy notable», la modificación de la legislación en torno a la sucesión a la corona: «aunque Felipe V debía a una hembra la sucesión a la corona de España, pensó decididamente en escluir a éstas del derecho que habían disfrutado hasta entonces». Páginas adelante, recoge la derogación de la ley sálica. El motivo, respaldar la sucesión de Isabel II, frente a las pretensiones carlistas⁷⁰.

En los primeros años pocas diferencias guardan entre sí las listas que van apareciendo⁷¹. Con el tiempo, aunque aparecen títulos

⁶⁹ «La propiedad de la tierra —dice— hace mirar a sus dueños con más amor que perteneciendo a muchos en común. El derecho de aprovecharse de ella perpetuamente y sin que nadie pueda inquietar su posesión, los excita a cultivarlas con más afán, y a hacerla producir más frutos. Fuera de esto, el amor a la tierra propia infunde en sus dueños más respeto y sumisión al gobierno que protege y asegura su dominio. Los que no poseen en propiedad tierra, casas u otras tales fincas, pudiendo trasladar más fácilmente sus personas, sus industrias y sus capitales a otras partes, son menos flexibles a la fuerza de las leyes, a la regularidad de las buenas instituciones civiles y a sufrir las contribuciones y demás cargas sociales. Los vacceos cultivaban el campo, alternando todos los años su posesión por suerte y con la obligación de repartir los frutos con sus vecinos. ¿Qué estímulos podían tener aquellos españoles para trabajar, plantar árboles, ni hacer otras mejoras que exigen tiempo y muchos gastos, no pudiendo disponer libremente de ellos para sí ni para sus familias?», J. Sempere, *Historia del derecho español*, Madrid, 3.ª ed., 1846, p. 27.

⁷⁰ J. M.ª Antequera, *Historia de la legislación española*, Madrid, 1849, pp. 225 y 231.

⁷¹ A pesar de que el plan establecía lista para cada tres años, éstas aparecen casi anualmente...

nuevos, suelen persistir por regla general los que aparecen desde el principio. Aunque, a pesar de lo previsto —no más de seis obras— no suelen aparecer más de tres —excepcionalmente cuatro— por asignatura. Se establece un monopolio de autores determinados. Los catedráticos que son ágrafos, por regla general, en estos años se dedican —algunos— a editar obras de texto. Y, el que publica un manual, con éxito, sea catedrático o no— no se resigna a intentar la misma suerte en otra materia. Así lo relata Antequera en el prólogo a su *Historia de la legislación española*:

Cuando a fines del año pasado de 1845 di a la prensa las *Leciones de la Legislación romana*, cuya primera edición se halla hoy en día enteramente agotada, ...fue muy grande mi sorpresa cuando a los quince días de su publicación y sin recibir apoyo ni recomendaciones de ningún género, se hallaba adoptada para texto en una gran parte de las universidades de España...

He creído, sin embargo, que nada perdería en dar un paso que tienda a facilitar el interesante estudio de la historia legal de España y en ofrecer al mismo tiempo a los alumnos de las universidades una obra de texto, que, a pesar de su reconocida importancia, no se había escrito hasta el día.

En las colonias —por lo menos para la Habana— las listas que aparecen son similares a las españolas aun cuando suelen primarse, caso de que las haya, las obras publicadas en aquellos lugares⁷².

En general, se observa una nacionalización de las obras⁷³. Se prefieren las obras originales españolas a las traducidas, por muy buenas que éstas sean. El castellano se había ido imponiendo en las facultades desde el plan Rivas.

Pilar García Trobat
Universitat de València

⁷² *Gaceta de la Habana*

⁷³ M. y J. L. Peset, *La universidad española...*, p. 694.